

XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia.
Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2017.

El movimiento campesino mexicano: luchas, alcances y contradicciones 1970-2004.

Puricelli, Sonia.

Cita:

Puricelli, Sonia (2017). *El movimiento campesino mexicano: luchas, alcances y contradicciones 1970-2004*. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-019/444>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Mesa 80. Resistencias y conflictos. Luchas sociales y políticas en relación a los procesos de acumulación y hegemonía en América Latina de las últimas décadas (1950-2015)

El movimiento campesino mexicano: luchas, alcances y contradicciones 1970-2004¹

Puricelli, Sonia²

Introducción

El movimiento campesino mexicano actual expresa un renovado ciclo de resistencias que se basa en una sinergia de experiencias de lucha de las últimas tres décadas del siglo pasado. La acumulación y la evolución de diferentes momentos de enfrentamiento han definido la trayectoria del movimiento que expresa los diferentes antagonismos y antagonistas que ha atravesado. El presente trabajo explora el problema de la relación conflictividad-capitalismo rural en México, destacando las contradicciones entre el capital y el trabajo agrario.

Considera primero el contexto de políticas económicas sectoriales, subrayando el papel del capital. El descontento rural responde a conflictos estructurales y coyunturales, desde la explotación incluyente durante el modelo sustitutivo de importaciones hasta la explotación excluyente por la reestructuración productiva capitalista en el régimen de acumulación neoliberal. A partir de los años noventa, la pequeña y mediana agricultura se encuentran en una crisis por la desestructuración del campo y la exclusión estructural productiva, consecuentemente los campesinos no participan en la acumulación y el flujo de la riqueza nacional.

Luego la ponencia discute un recorrido de los antecedentes de conflictos rurales en la historia reciente con miras a destacar su importancia presente. En la década de los setenta del siglo pasado prevaleció la ofensiva por la tierra como medio de producción. En los dos lustros posteriores predominó la resistencia defensiva por la autogestión campesina en el proceso productivo. Hacia fines del siglo, estallaron confrontaciones de

¹ La presente ponencia retoma ideas del capítulo de mi autoría “Contradicciones y confrontaciones en el campo mexicano” en *Perspectivas críticas sobre la conflictividad social*, coords. Guido Galafassi y Sonia Puricelli (Buenos Aires: Ediciones Extramuros, 2017, pp. 95-111).

² GEACH-UNQ.

productores medianos y ricos por el endeudamiento sectorial y, aparte, el indigenismo ante el capitalismo.

Finalmente el texto interpreta la explosiva lucha del presente siglo. En el primer lustro, una coalición de organizaciones campesinas enfrentó agravios específicos y denunció las condiciones generales acumuladas de la descampesinización, la desestatización, la descapitalización rural, el desmantelamiento del mercado interno y la dependencia alimentaria nacional. En general, reivindicó la existencia, subsistencia y productividad del campesinado por medio de políticas públicas e intervención estatal. En particular, demandó reformas puntuales centradas principalmente en renegociar el aplazamiento y la reestructuración del capítulo agropecuario del TLC, un presupuesto sectorial creciente, mecanismos para alcanzar la soberanía alimentaria y la inclusión productiva campesina para el mercado interno. El papel desempeñado por el movimiento campesino para el cambio social se evidencia en las transformaciones realizadas en diferentes ámbitos nacionales.

Estructuras y dinámicas

El llamado milagro agrario, en el marco del modelo sustitutivo de importaciones mexicano de los años cuarenta hasta los sesenta, incluía a los trabajadores urbanos y rurales como productores y, a la vez, como consumidores de bienes. En dicho crecimiento endógeno, el campesinado fungió un papel productivo estratégico proveyendo insumos industriales y alimentos baratos para el mercado interno, y autosuficiencia alimentaria nacional. Asimismo, la pequeña y mediana producción rural aportó a la industrialización nacionalista, la creación de valor y la reproducción y distribución del capital nacional en esta explotación capitalista incluyente y redistributiva.

A partir de los setenta, cayó significativamente la tasa de plusvalía, el salario real empezó a crecer más rápidamente que la productividad del trabajo, y la extracción de plusvalor agrícola sin inversiones compensatorias adecuadas culminó en una contradicción insostenible entre la industria y la agricultura. Los efectos de la industrialización a expensas de la agricultura trascendieron en el rezago tecnológico y productivo agrario y el sector perdió su dinamismo (Rubio 2003, 63). Se estancó el modelo económico nacional en el contexto de una crisis de la expansión del capital y endeudamiento internacional, aunque se prolongó el régimen durante los setenta.

La combinación de un campo efervescente y cierto interés por recuperar la productividad campesina, indujeron políticas populistas agrarias a fines de 1973 con el

propósito adicional de procurar la paz social. Por última vez, el Estado participó en la expropiación, la inversión y los procesos de comercialización para los campesinos. La última etapa de la distribución de tierra entre jornaleros, dio como resultado mayor productividad campesina y relativa legitimidad estatal durante el primer lustro del decenio, a costa de derrame de sangre en la lucha. A partir de los diferentes intereses sexenales del sistema presidencialista, el Estado dejó de fungir como mediador entre clases después de 1977. Ante la puerta estatal cerrada, la organización de la lucha por la tierra comenzó a desmantelarse y perdieron fuerza política las organizaciones mismas.

En la siguiente década, se reordenó mundialmente el régimen de acumulación para recuperar la rentabilidad del capital. En un contexto de crisis alimentaria, caída en los precios, una deuda crítica y el achicamiento del gran mercado mundial, el neoliberalismo incursionó en México después de la ruptura con el modelo sustitutivo de importaciones en 1982, siendo manifiestamente perceptible el cambio económico sectorial en los noventa. Los fundamentos de la recuperación productiva en el sector agrícola mediante la liberalización comercial y la privatización, significaron para México un crecimiento exógeno favorable para una elite. Las políticas neoliberales del retiro de la intervención e inversión estatal del proceso productivo, la desregulación del mercado agroalimentario, el encarecimiento de alimentos sin el aumento correspondiente de salarios prescindieron del mercado interno y del pacto social. El Estado mexicano redujo severamente las políticas de crédito, el gasto público para el desarrollo rural y las agencias estatales de adquisición y distribución. Los subsidios a la agricultura se redujeron y en varios casos se orientaron a los grandes productores o a las empresas agroindustriales. Los precios internos de garantía fueron eliminados y los productos actualmente se venden en el mercado interno a precios con referencias internacionales que no consideran los costos de producción locales. Entre 1989 y 1994, México pasó de ser una de las economías más protegidas, a ser una de las economías más abiertas del mundo (De Ita 2004, 35). Desde los años noventa hasta hoy, la pequeña y mediana agricultura se encuentran en una crisis estructural. Las nuevas formas de explotación y subordinación de trabajo campesino se sustentan en un dominio excluyente porque no es capaz de reproducir a las clases subalternas en su condición de explotados, sino que tiende a excluirlas (Rubio 2003, 102).

La caída estructural del salario real (para compensar la pérdida industrial de plusvalía) sin acompañarla con una reducción en el precio de los víveres, fue una medida drástica. Dado que los salarios se redujeron, no a través de un abaratamiento de alimentos, sino mediante vías coercitivas -el desempleo bajó los salarios políticamente-, la capacidad

de adquisición de los trabajadores menguó en general y el precio de los alimentos se separó del nivel de los salarios. Esta dinámica significa que la industria excluye a los campesinos como productores de alimentos baratos que maximizan el poder adquisitivo popular (Rubio 2003, 103, 104, 114). Mientras que bajo el modelo neoliberal los salarios mínimos perdieron 69.9% de su poder adquisitivo (Calva 2003, 5), los alimentos no se abarataron proporcionalmente, sino que se encarecieron. “Con ello, las grandes empresas tienen la posibilidad de producir alimentos a precios elevados, que no entorpecen la reproducción del capital global.” (Rubio 2003, 131) Por otro lado, la exclusión de los campesinos de participar en la industrialización nacional trascendió en una descapitalización rural por el abandono del financiamiento y la inversión. En este marco, se ancló la fase agroexportadora en México, descansando la producción agrícola en el dominio de la agroindustria depredadora en vez de la vía campesina. Estas condiciones han permitido impulsar una forma de subordinación sobre los productores rurales por parte de las grandes agroindustrias alimentarias que desmantelan la producción nacional, no sólo campesina, sino también la pequeña y mediana industria. Son tres los sectores del capital que impulsan esta subordinación y comandan el nuevo modelo de desarrollo: el sector especulativo financiero, el sector industrial transnacional y el sector agroalimentario multinacional (Rubio 2003, 103).

Uno de los instrumentos más eficaces para la descampesinización institucional fue la conocida reforma al Artículo 27 Constitucional en 1992, que tuvo como objetivo colocar la tierra ejidal en el mercado para atraer capitales privados. Esta iniciativa para privatizar a los ejidos rompió el contrato social agrario de la Revolución mexicana (Calva 1999, 47) y en un solo golpe estranguló el reparto agrario al eliminar el carácter patrimonial, inalienable, imprescriptible e inembargable de la propiedad ejidal y comunal, y facilitó la venta y renta de parcelas campesinas, ahora económicamente inviables.

A la par, las políticas comerciales internacionales asimétricas han perjudicado al sector en general. La política agropecuaria estadounidense regula su rentabilidad agrario a través de inversiones, subsidios, la tecnificación, la biotecnología, y la producción monopólica. México compite con EEUU, país que subsidia su agricultura para establecer precios políticamente artificiales y hasta debajo del costo de producción. Este *dumping* ha estrangulado el mercado interno mexicano, entre otros.

La *Farm Bill* estadounidense, aprobada en el año 2002, agudizó la distorsión de los mercados globales agrícolas y las importaciones agrícolas de México. Esta legislación significó un aumento de hasta 118 mil millones de dólares cada año entre 2002 y 2011

(Calva 2003, 23) y representó un incremento del subsidio a la agricultura estadounidense de más de 80% respecto al presupuesto aprobado por la Ley para la Liberalización Agrícola de 1996. La Ley se resume como una política de asistencia social para las corporaciones transnacionales (Mittal y Rosset 2003, 112, 115, 121).

Conjuntamente, el GATT en 1986 y posteriormente el TLC en 1994 han profundizado y consolidado la crisis estructural, pues institucionalizaron ventajas comerciales distorsionadas que desmantelan la pequeña y mediana producción nacional. La eliminación de aranceles y la competencia asimétrica con EEUU significan que México importa grandes volúmenes de alimentos en vez de cultivarlos, dado que es más barato en términos económicos. En lo inmediato, el TLC significó que las importaciones de alimentos se dispararon de 1.790 millones de dólares en 1982 a 7.274,4 millones de dólares en 1994 y hasta 11.077,4 millones de dólares en 2001 (Calva 2003, 25). La compra abundante de alimentos incluye algunos particularmente básicos y sensibles para la dieta nacional. Entre otros productos, 95% de la soja de consumo es importada, también 58.5% de arroz, 49% de trigo, 40% de la carne que se consume y -aún más estratégico- 25% de maíz (Quintana 2002, 7).

La desregulación del mercado y la apertura comercial -que sustituyeron la intervención estatal programática- imposibilitan el excedente de la producción campesina, la reproducción social del campesinado, y el desarrollo agrícola sustentable y soberano. El retiro de subsidios comerciales para el campesinado provoca la actual no rentabilidad del campo mexicano mientras que, por otro lado, se canalizan dichos apoyos a la agroindustria nacional e internacional. Significa que no es rentable trabajar la tierra en pequeña y mediana escala y hay una depreciación económica, política y social de los productores. Para el país en general se traduce en la pérdida de autosuficiencia alimentaria, en un déficit sectorial y en la subordinación al capital internacional.

Nacionalmente, el campesinado ya no es estratégico para la generación de riqueza nacional a través de insumos industriales, alimentos baratos y determinación salarial. Efectivamente, los campesinos son desvinculados de la reproducción del capital por las siguientes contradicciones: a) el dominio del capital financiero y especulativo sobre el productivo, b) el dominio del capital industrial que margina a los campesinos como productores de bienes baratos, y c) el dominio de precios bajos y subsidios del capital agroindustrial multinacional sobre los campesinos y pequeños y medianos empresarios agrícolas (Rubio 2003, 148, 149).

Luchas campesinas contemporáneas en el siglo XX

Las luchas mexicanas del presente siglo remontan a una sinergia de antecedentes contemporáneos: en la década de los setenta hubo movilizaciones de masa por la tierra; en los ochenta se activaron redes especializadas por rama productiva; en los noventa estalló El Barzón por el endeudamiento sectorial y el neozapatismo por el indigenismo ante el capitalismo. El abanico de demandas y estrategias de acción responden a un conjunto de detonantes de exclusión de pequeños y medianos productores y el descontento social desde el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones hasta el actual modelo neoliberal.

Durante los años setenta del siglo pasado prevaleció la ofensiva por la tierra como medio de producción y, en menor medida, se luchó también por precios, salarios, crédito, productividad, comercialización y el excedente económico. El interés estatal en estimular el capitalismo doméstico y la productividad agrícola facilitó la materialización de esta etapa de la distribución de la tierra. Fungió como mediador de clases y controló las pugnas de intereses. La efervescencia social agraria del periodo se debe principalmente al descontento acumulado por la pauperización del campesinado, la crisis de legitimidad de las organizaciones tradicionales en el campo (sobre todo las organizaciones masivas que eran centrales relacionadas con el Estado: Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Independiente) y la política neopopulista gubernamental que relanzó la producción agropecuaria con el fin de combatir la crisis sectorial (Paré 1985, 93).

Mediante intensas movilizaciones, los campesinos obtuvieron su primera demanda: tierra, la cual se demandada desde los años cincuenta. Impulsaron también el crédito, la productividad, la comercialización y el excedente económico. No obstante, la lucha predominante del periodo fue claramente de los jornaleros por obtener un medio de trabajo, es decir, la tierra, cuya solicitud estaba trabada desde décadas por la burocracia o la corrupción. Hubo “[t]res millones de campesinos solicitantes, agrupados en torno a más de 60 mil comités particulares ejecutivos cuyos expedientes [estaban detenidos], frenados por fallos negativos o simplemente extraviados.” (Bartra 1985, 105) En un principio, las contiendas fueron dispersas regionalmente, empero con una diversidad de estrategias: además de marchas a la capital, hubo ocupaciones de latifundios, tomas de oficinas públicas, caravanas, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras.

En 1973 el movimiento campesino cobró un carácter nacional; se extendió en prácticamente todos los estados y comenzó a estructurarse, enlazarse y coordinarse en organizaciones regionales. Existían cuatro frentes de lucha: los pequeños productores

regionales por los precios, los jornaleros agrícolas regionales por sus salarios, la democracia contra la imposición política, y, sobre todo, los que no podían esperar más por la dotación de la tierra (Bartra 1985, 103, 110). El movimiento campesino logró una considerable organicidad e independencia del Estado en poco tiempo; casi 80% de las organizaciones de lucha por la tierra se formaron antes de 1974 (Bartra 1985, 111). En la misma tónica, la creación de las primeras grandes centrales independientes con tintes socialistas también marcó el periodo, con su método de lucha de movilizaciones masivas. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se organizó como el brazo campesino del Partido Comunista por la transformación de las estructuras socioeconómicas y, en particular, la sindicalización, la tierra para los jornaleros agrícolas, sus salarios y la producción. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) también emprendió la lucha ofensiva frente a la clase dominante y el sistema de explotación; específicamente para destruir la propiedad latifundista y el capital agrícola con el fin de favorecer la tierra ejidal y comunal. Además de la explosión de organizaciones, también prosperaron alianzas y coaliciones entre campesinos, y con otros sectores, principalmente estudiantes, intelectuales y obreros.

Fortalecidos por las alianzas, los campesinos ejercieron una presión social considerablemente fuerte a través de las numerosas movilizaciones. Además, el interés del ejecutivo nacional en estimular la reproducción del capital nacional y la producción agraria resultó en una alianza temporal con las clases populares, perjudicando a la burguesía terrateniente, especialmente a los grandes empresarios industriales del noroeste (aunque no faltaron las compensaciones económicas). Durante la lucha ofensiva de los primeros seis años de la década de los setenta, entre 1973 y 1976, el gobierno fue relativamente tolerante con respecto a las afectaciones, y se legalizaron las tierras invadidas posteriormente, dado que la producción campesina era aún útil a los intereses del Estado.

No obstante, el cambio presidencial de 1977 implicó un parteaguas de intereses estatales y la lucha se volvió defensiva frente a las nuevas políticas agrarias sexenales que desmantelaron el reparto de tierra. Acercándose a la burguesía agraria, la visión del nuevo gobierno se enfocó hacia la productividad y eficiencia de la agricultura empresarial privada. Dado que sentenció al ejido como ineficiente, expresó que no constituía una alternativa a la crisis agraria (Bartra 1985, 131), y los capitalistas agropecuarios, sobre todo los ganaderos, cuestionaron la presencia de los campesinos como detentadores de tierra (Rubio 1996, 119). Consecuentemente, se aplicó una drástica desautorización

política de las tomas de tierra; no sólo no se permitieron las invasiones, sino también se tornó delito federal (Bartra 1985, 132).

En el ámbito nacional siguieron las luchas por la tierra y los precios de producción, también las marchas y tomas de las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero ante la cerrazón y represión empezó el reflujo de las movilizaciones y aumentó el costo humano de encarcelamientos y muertes. “[E]n 1977 los periódicos registran 244 detenciones de campesinos, número poco superior al de 1976 en que fueron 238, pero el número de asesinatos se triplicó con respecto al año anterior al pasar de 81 a 242[.]” (Bartra 1985, 140) Este hecho marcó clara y violentamente el principio del fin del reparto agrario mexicano.

Mientras la lucha por la tierra fue frenada por intereses políticos, se generalizó el combate por la producción y se observa una transición de la estrategia ofensiva setentista que buscó transformar las estructuras sociopolíticas, hacia una defensiva, más moderada, que apuntó hacia la integración productiva campesina en la siguiente década.

Los años ochenta encerraron un contraste trascendental. En México estaban agotados los modelos de crecimiento hacia adentro y de la vía campesina. El Estado no tenía interés para impulsar la producción campesina para el mercado interno, sino que estimuló a los empresarios agrícolas y creció la agroindustria exportadora de productos exóticos. Por otro lado, el desplome de precios internacionales favoreció las importaciones de alimentos básicos y la tierra dejó de ser rentable para la producción campesina; la parcela ya no constituía un medio de subsistencia y menguaron las solicitudes de tierra dado que resultaba incosteable trabajarla. En general, las luchas por la tierra estaban debilitadas, por lo tanto no fue necesaria la represión física; el Estado sólo recurrió a la cooptación mediante la integración de líderes al gobierno.

En cambio, acrecentó la lucha defensiva por la productividad de la tierra ya dotada, la apropiación del excedente económico, mejores condiciones de trabajo (precios, recursos públicos, financiamiento, infraestructura, insumos, asistencia técnica, comercialización) y, sobre todo, la autogestión campesina en el proceso productivo. La finalidad de esta última sería transferir las técnicas y la administración productiva a las organizaciones campesinas como si fueran microempresas para reintegrar al campesinado en el modelo de acumulación. Emergió una convergencia de organizaciones autónomas y se obtuvieron concesiones considerables para proyectos productivos e iniciativas de financiamiento dentro del marco del modelo excluyente.

En particular, surgió la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) de una coalición de organizaciones que representaron a ejidatarios y pequeños propietarios nacionalmente. Luchó por la apropiación de las organizaciones de productores del proceso productivo, del excedente y los instrumentos de fomento. Su meta, a grandes rasgos, estribaba en contrarrestar los efectos negativos del nuevo modelo económico a través de soluciones propositivas de autogestión campesina.

En calidad de interlocutor con el gobierno y con un método de no-confrontación (por lo tanto, poco reprimida), la táctica de la UNORCA consistió en transformar los campesinos en empresarios sociales para ser eficientes, modernos y competitivos, de acuerdo con las exigencias de la inserción neoliberal y, por ende, aumentar el nivel de bienestar rural a través de las actividades productivas, el empleo y la rentabilidad. Sin cambiar el modelo económico, reivindicaron convertir la producción de alimentos básicos en una política económica, la autosuficiencia alimentaria nacional, el mercado interno, la intervención estatal para aumentar la inversión pública y privada sectorial, un aumento de los precios de garantía, y la capitalización y redistribución del ingreso rural.

Después de obtener concesiones significativas y numerosos proyectos productivos (incluyendo cajas de ahorro, uniones de crédito, maquinaria y la fundación de asociaciones campesinas), el declive de la unión comenzó con la creación del organismo oficial el Congreso Agrario Permanente en 1989 (en el cual la UNORCA fue temporalmente integrante) que concentró la interlocución con el Estado y los recursos; y la contrarreforma al Artículo 27, que provocó divisiones entre las organizaciones; y las políticas del TLC, que desmantelaron la razón de ser de muchas organizaciones campesinas. La plataforma de la inserción productiva campesina dentro del capitalismo neoliberal halló el problema de que no había condiciones estructurales para convertir a los campesinos en empresarios, ya que no tenían lugar en el modelo de acumulación y la lucha por el proceso productivo encontró su límite. “El proyecto de integración productiva desembocaba así en un callejón sin salida: los campesinos tenían que dejar de ser campesinos para poder integrarse al modelo vigente, pues sólo como empresarios tendrían cabida en él.” (Rubio 1996, 131)

Se desbarató la razón de ser de muchas organizaciones campesinas. En este horizonte de descomposición rural aparecieron nuevas resistencias nacionales y ofensivas durante los noventa, así como redes de organizaciones independientes especializadas. La tendencia estribó en ampliar la bandera campesina de reivindicaciones, particularmente

contra la ideología, las prácticas y las consecuencias del modelo económico. El impacto perjudicial del neoliberalismo en las clases populares se manifestó explícitamente en la última década del siglo, y el sector agropecuario se hundió en una crisis estructural. La reorganización del corporativismo para legitimar el presidencialismo electoralmente fraudulento fortaleció a la Confederación Nacional Campesina, organización oficial, como el interlocutor del Estado, desviando así el diálogo con otras organizaciones campesinas. Las condiciones de marginación y la cooptación desestructuraron la resistencia articulada de las organizaciones protagonistas de los ochenta.

En 1993 estalló una protesta de medianos y ricos empresarios agrícolas que producían para el mercado interno, los cuales eran inicialmente beneficiados por el corporativismo y posteriormente marginados por el ajuste estructural neoliberal hasta encontrarse en un estado de endeudados y embargados. El Barzón fue un movimiento nacional que exigió espectacular y ruidosamente la moratoria y condonación de las carteras vencidas. Por primera vez el adversario fue identificado como el capital privado: los bancos, Hacienda y el dominio del capital financiero. El movimiento fue antineoliberal en el sentido de que reivindicó la reactivación del mercado nacional, la soberanía alimentaria y la eliminación de los monopolios productivos y comerciales. Entre sus demandas específicas exigió la suspensión de procedimientos judiciales, la reestructuración de las carteras vencidas, el cambio de los procedimientos judiciales por administrativos y la exención de las casas-habitación de los procedimientos judiciales (Rubio 1996, 143). Ejerció una presión social llamativa mediante plantones con tractores, y hasta elefantes en las marchas, además de emplear métodos más tradicionales: tomas de oficinas de Banrural, bloqueo de carreteras y diálogo con el Estado. Renegoció significativamente las carteras vencidas de los endeudados, no obstante, no transformó las estructuras del modelo de acumulación ni el sector financiero hegemónico, y los campesinos pobres (que no son sujetos de crédito) no se beneficiaron directamente de los alcances de este movimiento.

La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) coincidió deliberadamente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994. Este movimiento indígena, con base campesina, declaró como adversarios al neoliberalismo, al gobierno y al poder burgués empresarial, con el fin de cambiar las relaciones y estructuras de poder. Demandó el reconocimiento de los derechos indígenas de autogestión política, económica y cultural; incluyó demandas nacionalistas de salud, vivienda, educación, tierra, empleo, alimentación y democracia; se manifestó en contra

del TLC y la contrarreforma del Artículo 27. Además de la insurrección confrontacional durante la primera fase de su lucha, emprendió ayunos, marchas, y tomas de tierra, y se caracterizó por la denuncia ideológica y cohesión interna entre militantes. Su revolución se realiza ahora con métodos pacíficos, incluyendo el ejercicio de espacios autónomos autogestivos sin Estado.

Aunque El Barzón y el neozapatismo detonaron protestas más ofensivas y claramente en contra del régimen de acumulación, no reactivaron la inserción productiva del campesinado para el mercado interno y no cambiaron las relaciones de explotación a nivel nacional. Sin embargo, articularon una plataforma campesinista más amplia e identificaron claramente las causantes estructurales.

Además de estallidos contestatarios, durante la década de los noventa surgieron redes -agrupaciones regionales de dimensiones más reducidas que las grandes centrales gremiales verticales- de servicios y gestión por especialización productiva en la forma de coordinadoras independientes con el fin de desarrollar políticas específicas y estrategias de sobrevivencia de acuerdo a su interés sectorial específico. La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social nació en 1992 como una red de servicios, uniones de crédito y financiamiento. En 1994 surgió la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, para ofrecer servicios a uniones de ejidos silvícolas y a comunidades propietarias de bosques. El siguiente año apareció formalmente la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo constituida por organizaciones regionales cerealeras, con el propósito de gestionar y promover las comercializadoras de maíz y tortillas, y proporcionar capacitación y asesoría. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras se estableció en 1989 en defensa de la calidad, producción y comercialización del café nacional, incluyendo cultivos orgánicos, en la lógica de la apropiación campesina del proceso productivo. Conquistaron espacios y respuestas políticas más institucionales durante etapas de apoyo estatal. Aunque las organizaciones campesinas tuvieron que competir por recursos y el reconocimiento del Estado, hubo momentos de alianzas efímeras de ciertas organizaciones independientes para reclamar la inclusión política.

Luchas campesinas a principios del siglo XXI

Al comenzar el presente siglo, las organizaciones campesinas en general se hallaron erosionadas. Sin embargo, el movimiento campesino mexicano se ha caracterizado por regenerarse y reinventarse en respuesta al momento histórico. Además del antagonismo

por los conflictos estructurales de exclusión y dominación acumulados a lo largo de décadas, y el contexto inmediato del nuevo gobierno de derecha panista que repercutió en mayor expulsión en términos de fondos e interlocución,³ hacia finales de 2002 hubo una coyuntura de tres detonantes adicionales, inminentes y específicos. Éstos versaron sobre el proyecto presupuestario rural decreciente para 2003, la penúltima etapa de desgravaciones del TLC para el mismo año (que liberalizaría 19 ramos de productos cotidianos), y, en menor medida, la discusión alrededor de la *Farm Bill*.

Doce organizaciones (centrales independientes, organizaciones autónomas y de redes especializadas) representativas de campesinos y pequeños y medianos productores se articularon en torno a problemas comunes en una coalición coyuntural, plural y de centro-izquierda: el frente El Campo No Aguanta Más (ECNAM).⁴ Sus organizaciones representaron a unos 500 mil labriegos (Ramírez Cuevas 2003, 4) y emprendieron múltiples protestas en sus casi dos años de estallido. Emergió públicamente a finales de 2002, maduró su plataforma durante 2003 y recibió una favorable respuesta mediática y social que benefició un fulminante e inesperado auge. El Movimiento El Campo No Aguanta Más (MECNAM) -integrado por el frente ECNAM en conjunto con otros tres bloques aliados: la Confederación Nacional Campesina, el Congreso Agrario Permanente y El Barzón⁵- fue una de las expresiones más multitudinarias en México en las últimas décadas.

Las organizaciones integrantes surgieron en diferentes contextos históricos, los cuales determinaron sus reivindicaciones, experiencias de lucha, enfoques políticos y modelos organizativos disímiles. En contraste con la relativa dispersión y, consecuentemente, las plataformas desarticuladas de las organizaciones protagonistas del

³ Después de siete décadas de la idiosincrática organización social del PRI, las organizaciones campesinas quedaron aún más marginadas políticamente con el naciente gobierno del PAN en el 2000 que, en un principio, no encontró sentido en la estructura del corporativismo rural priísta ni en las organizaciones campesinistas, tanto corporativas como autónomas.

⁴ Convergieron: la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); la Central Campesina Cardenista (CCC); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC); la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh); la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF); la Unión General Obrero, Campesina y Popular-Coordinadora Nacional (UGOCP-CN); la Unión Nacional de Organizaciones en Forestaría Comunitaria (UNOFOC); la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

⁵ El Congreso Agrario Permanente (CAP) comprendió, a su vez, doce organizaciones miembros (incluyendo a la CIOAC y la CCC que fueron integrantes individuales al frente ECNAM). La Confederación Nacional Campesina también fue integrante de la CAP, aunque esta última se consideró como un bloque aparte por su historia y extensión. Fue llamativo que el EZLN no apoyó el MECNAM.

movimiento campesino en los últimos seis lustros del siglo veinte, el Movimiento espontáneo El Campo No Aguanta Más construyó por primera vez una plataforma en conjunto, defensiva y ofensiva. Integró, amplió y actualizó los heterogéneos intereses particulares de las organizaciones rurales (desde las organizaciones campesinas centrales veteranas hasta las organizaciones relativamente nuevas de especialización de servicios y rama productiva) en un proyecto común que reflejó su acumulación de reivindicaciones y experiencias de lucha desde los años setenta, unificando sus trayectorias. Expresó una evolución natural, aunque no automática, de las luchas históricas recientes: por la tierra en los setenta, para la inclusión productiva en los ochenta y en contra del marco neoliberal a partir de los noventa.

En general reivindicó la existencia, subsistencia y productividad del campesinado por medio de políticas públicas e intervención estatal. En particular, demandó reformas puntuales centradas principalmente en renegociar el aplazamiento y la reestructuración del capítulo agropecuario del TLC⁶, un presupuesto sectorial creciente, mecanismos para alcanzar la soberanía alimentaria y la inclusión productiva campesina para el mercado interno.

Las movilizaciones y tácticas más significativas y propagandísticas fueron las siguientes: comunicados; manifiestos; cartas declarativas simbólicas o propositivas; marchas -incluyendo una megamarcha de cien mil personas al zócalo capitalino-; cabildeo legislativo; mítines; bloqueos de carreteras; ayunos; plantones; cierre simbólico de la frontera norte; tomas simbólicas de aeropuertos, puertos y oficinas gubernamentales; conferencias de prensa; múltiples manifestaciones de apoyo y alianzas; la plataforma Plan Campesino para el Siglo XXI; ponencias en el cuestionado foro con el gobierno llamado las Mesas de Diálogo; propuestas para el polémico Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) firmado entre varias entidades y el gobierno. Paralelamente se generaron foros y eventos académicos de discusión, además de apoyo mediático y de variados sectores (investigadores, sindicatos, frentes, redes, artistas, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y religiosas). La megamarcha, las Mesas, el proyecto campesino integral y el Acuerdo Nacional fueron esencialmente novedades; las demás dinámicas han sido parte de la historia de lucha campesina.

⁶ Se propuso reestablecer los aranceles y cupos de importación vigentes en 1994 para productos agropecuarios básicos, en particular: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, carne de porcinos, carne de aves y pescado. La demanda de congelar provisionalmente la desgravación tenía como finalidad regular el comercio exterior y así corregir los efectos nocivos de la artificial y desleal competencia internacional, en el marco de casi una década del Tratado.

El papel del movimiento en el cambio social se evidenció en las transformaciones realizadas en diferentes ámbitos nacionales. En términos económicos, la demanda inicial de aumentar el gasto público sectorial materializó notablemente, aunque no cabalmente. Se crearon, y reorientaron, algunos programas productivos, comerciales y, sobre todo, sociales, y la importación de maíz blanco se redujo significativamente. Aunque no se haya renegociado el capítulo agropecuario del Tratado, ha habido soluciones parciales a problemas puntuales, concretamente acciones inmediatas asistencialistas y el desarrollo social del campo.

En la esfera política, el diálogo emprendido con altos niveles del gobierno (una dinámica nueva para algunas organizaciones, recuperada para otras) significó un reconocimiento estatal a ellas como interlocutores. Igualmente, se fortalecieron a contracorriente las organizaciones campesinas y se efectuó un ligero reordenamiento en las relaciones Estado-organizaciones campesinas. Consecuentemente, creció la representación rural apartidista y del Partido (de izquierda) de la Revolución Democrática que alteró el predominio histórico en el campo del Partido (del centro) Revolucionario Institucional, y tenuemente la distribución de recursos. Con las movilizaciones se denunciaron masivamente las políticas públicas sectoriales perjudiciales y se desprendieron debates públicos y publicaciones de análisis sobre el tema, propuestas, cuestionamientos y diagnósticos, por el renovado interés público en el campo. En la opinión de no pocos, la huella más importante y perdurable es la plataforma integral, clasista y programática que deriva de las iniciativas del Movimiento El Campo No Aguanta Más.

En materia social, por un lado, el extenso e institucionalmente firmado Acuerdo Nacional para el Campo de 282 puntos (38 correspondientes a políticas y enunciados generales y 244 a acciones, criticado por tener sólo 63 compromisos nuevos) representa un documento que, en caso de cumplirse, podría ser una herramienta para reformar políticas tanto inmediatas como de largo plazo, y fundar nuevas relaciones de trabajo en el sector agrario que repercutirían incluso en la soberanía alimentaria nacional y en un nuevo pacto social. Es, en teoría, un replanteamiento de política agraria, mas hasta ahora ha sido un documento con un significado predominantemente simbólico. Por otro lado, las protestas y el interés mediático incidieron en la opinión pública y en el debate nacional que visibilizó la problemática campesina, con hincapié en el cuestionamiento público al TLC.

Pese a los logros cuantitativos y cualitativos, persisten los problemas de forma y de fondo. Por ejemplo, candados estructurales como el subejercicio presupuestal, la desigualdad entre subsidios comerciales para grandes productores y apoyos asistenciales para pequeños y medios, el corporativismo clientelar, y la importación masiva de maíz amarillo y maíz quebrado, entre otros alimentos nacionalmente sensibles. Las relaciones de productividad asimétricas no se transformaron estructural y sistemáticamente, por ende no resolvieron las contradicciones del campo mexicano, desde la precariedad campesina y su marginación productiva del mercado hasta la soberanía alimentaria. El MECNAM no materializó el meollo de su plataforma por contradicciones exógenas y endógenas: las condiciones económico-políticas nacionales e internacionales, y las limitantes del mismo movimiento que no superó su carácter espontáneo y coyuntural.

La relación con el Estado resultó particularmente corrosiva y los obstáculos en el poder de negociación del movimiento erosionaron la cohesión interna. Las siguientes estrategias gubernamentales específicas corroyeron el movimiento: herramientas burocráticas (tanto para filtrar las acciones como para comprobar oficialmente que las políticas gubernamentales no requieren modificación), recursos desiguales entre las organizaciones, el subejercicio presupuestal, candados para entregar recursos, un nuevo corporativismo del nuevo gobierno panista y, sobre todo, el incumplimiento del ANC. Al interior del frente ECNAM, la alianza heterogénea de organizaciones (desde centrales de masa hasta redes especializadas de rama productiva como ONGs empresariales) conllevó incompatibilidades concernientes a sus métodos e intereses, las cuales también debilitaron su convergencia.

Después de la fractura específicamente del frente ECNAM, sus organizaciones se reagruparon en nuevos polos de alianzas. Surgieron flamantes coaliciones como el Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa y la campaña nacional Sin Maíz No Hay País; el Movimiento Rural Antineoliberal y Anticapitalista; el Frente Indígena y Campesino de México; El Campo Es De Todos; El Frente Auténtico Del Campo. Han retomado las demandas por políticas sectoriales, la moratoria contra el TLC y el presupuesto sectorial, y las han actualizado con nuevas reivindicaciones como la resistencia al maíz transgénico, el *fracking*, la reforma energética y despojos. (Rubio 2017).

Las nuevas constelaciones de agrupaciones rurales tampoco han realizado las grandes demandas y, en este momento el sector rural se encuentra en una etapa de relativa desarticulación. Empero, se podría especular sobre un inminente y renovado ciclo de

contradicciones y confrontaciones en el campo mexicano ante el interés del nuevo y polémico mandatario estadounidense republicano en replantear el TLC en sus términos, entre otros muros y nudos para intensificar el proteccionismo al mercado del vecino norteamericano.

Reflexiones finales

Los conflictos más grandes en el campo mexicano contemporáneo han atravesado diferentes antagonismos y antagonistas a lo largo de medio siglo. La marginación campesina actual contrasta con la explotación incluyente experimentada en los años setenta durante la prolongación del modelo sustitutivo de importaciones, etapa en la cual emergieron las primeras coordinadoras centrales rurales independientes. Mientras se manifestaron agudas contradicciones entre el Estado y la burguesía privada, la tierra era la única opción para la sobrevivencia de los jornaleros. Ante la presión social desbordada y dentro de un entramado de desarrollo nacionalista, el gobierno enfrentó a la burguesía agraria con expropiaciones, concediendo uno de los repartos de tierras más trascendentes de la historia mexicana con la finalidad de legitimar al Estado y contener el movimiento campesino.

A partir de la siguiente década, la esencia excluyente del nuevo régimen de acumulación que surgió de la reestructuración productiva capitalista ha evidenciado las contradicciones del modelo económico neoliberal. En los últimos lustros del siglo XX, se manifestó una diversidad de confrontaciones de diversas índoles: los campesinos emprendieron luchas defensivas por la inclusión productiva de los campesinos y surgieron organizaciones independientes rurales de redes especializadas; posteriormente productores medianos y ricos contra el endeudamiento; y, a la par (aunque aparte), campesinos chiapanecos organizados en una renovada guerrilla indígena. Las luchas enfrentaron las relaciones de explotación, no obstante, cada uno con métodos diferentes y demandas específicas.

La persistencia de la desestructuración del campo en el presente siglo se ha manifestado en una profundización de la exclusión productiva y económica que sigue expulsando las fuerzas productivas rurales del mercado y agudizando la enajenación de sus medios de producción. El descontento acumulado fue evidenciado con la confrontación rural más grande de las últimas décadas que se basó en una coalición de organizaciones (predominantemente centrales de masas de los setenta y organizaciones más pequeñas de redes especializadas de ramas productivas de los ochenta y noventa),

representando un sustento gremial de campesinos y pequeños y medianos productores y un cúmulo de reivindicaciones. Cuestionó el modelo económico en general y demandó políticas públicas sectoriales concernientes a sus condiciones de producción y comercialización encauzadas a la reproducción social y productiva campesinista con la finalidad de modificar las relaciones de trabajo rural dentro de la reproducción del capital nacional.

El campesinado resulta prescindible para el proyecto de acumulación neoliberal ya que no reproduce el capital y consecuentemente no puede reproducirse socioeconómicamente como campesinos. Expulsados de la producción y expansión del capital y desvalorizados económica y políticamente, la tendencia del campesinado organizado es precisamente reivindicar su derecho de reproducirse como clase social.

Las experiencias de lucha más antisistémicas, en el sentido de influir en las desigualdades del capitalismo histórico, se desarrollaron en los setenta, cuando cambiaron las relaciones de propiedad en la última etapa de las grandes movilizaciones por el reparto agrario, y en los noventa, cuando criticaron y desafiaron los procesos y estructuras de la economía nacional. La lucha rural del presente siglo se ha caracterizado por su índole reformista y expresa una renovada etapa sinérgica del movimiento. Ésta se creó con base en la evolución de tres décadas de lucha, las cuales -a su vez- expresaron distintas etapas del movimiento que, en conjunto, constituyen expresiones de diferentes momentos de la trayectoria histórica del movimiento campesino contemporáneo en México.

Las variadas luchas del movimiento campesino histórico lograron concesiones significativas durante el siglo pasado mas no alteraron propiamente las estructuras del régimen de acumulación capitalista. No es excepción la explosiva lucha más reciente a principios del siglo, la cual no eliminó las relaciones de explotación y dominio, sino trascendió en reformas importantes dentro de la lógica de la reproducción del poder en el orden neoliberal.

Las contradicciones en el campo se expresan en diferentes niveles, La principal contradicción capital-trabajo agrario expresa el antagonismo económico y productivo creado por el actual régimen de acumulación del capitalismo periférico que privilegia el capital transnacional privado sobre la inversión pública del Estado nacional en un contexto mundial general del predominio del capital financiero y especulativo (no productivo) sobre el capital productivo (de la industrialización y el agro que producen valor). La desestatización del campo y la consecuente descapitalización rural se traduce en la descampesinización de los productores mexicanos como un proyecto político, ya

que el modelo económico descapitaliza la pequeña y mediana producción, y desarticula la agricultura nacional mientras desmantela el mercado interno.

En un nivel sectorial más específico, la conflictividad del presente siglo ha evidenciado las contradicciones en la actual coyuntura del dominio de capitales transnacionales agroexportadores y agroindustriales depredadores en el neoliberalismo, que expulsan los trabajadores rurales y deterioran la relación Estado-campo.

Cabe señalar que ha habido contradicciones de otra índole como, por ejemplo, el antagonismo endógeno de las diversas formas de cultura política de las organizaciones campesinas en la máxima expresión de resistencia campesina en el primer lustro del siglo. Con otros matices, se observa una relación contradictoria también entre el capital y la identidad del *campesindio*. Si bien el régimen de acumulación destruye costumbres, valores y prácticas rurales, es una identidad cultural de estilo de vida clasista inseparable de su trabajo, por lo tanto se podría enlazarla a la contradicción principal de capital-trabajo agrario.

Bibliografía

- Bartra, Armando. 1985. *Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México*. México: Ediciones Era.
- Calva, José Luis. 1999. El papel de la agricultura en el desarrollo económico de México: retrospectiva y prospectiva. En *Problemas del Desarrollo*, 35-56. México: UNAM-IIIEc, julio-septiembre, volumen 30, número 118.
- _____. 2003. La agricultura mexicana frente a la nueva ley agrícola estadounidense y la ronda de liberalizaciones del TLCAN. En *¿El campo aguanta más?*, coords. Rita Schwentesius, Manuel Ángel Gómez, José Luis Calva Téllez y Luis Hernández Navarro. México: UACH.
- _____. 2003. La reforma estructural de la agricultura y la economía en México: resultados y alternativas a nueve años del TLCAN. En *¿El campo aguanta más?*, coords. Rita Schwentesius, Manuel Ángel Gómez, José Luis Calva Téllez y Luis Hernández Navarro. México: UACH.
- De Ita, Ana. 2004. Soberanía alimentaria vs 'libre comercio'. En De Ita, Ana, ed. *OMC, estación Cancún: el descarrilamiento*. México: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano/UNORCA.
- Mittal, Anuradha y Peter Rosset. 2003. Perdiendo nuestra tierra: la Ley Agrícola de 2002. En Bartra, Armando. *Cosechas de ira. Economía política de la contrarreforma agraria*. México: Editorial Itaca.
- Paré, Luisa. 1985. Movimiento campesino y política agraria en México 1976-1982. *Revista Mexicana de Sociología*. México, UNAM-IIS (octubre-diciembre, año XLVI, número 4): 85-111.
- Quintana, Víctor M. 2002. Guerra antipopular prolongada. El campo no aguanta más. *Ojarasca*, suplemento de *La Jornada*, número 68, 8 de diciembre.
- Ramírez Cuevas, Jesús. 2003. *El campo, en el ojo del huracán. Masiosare*, suplemento de *La Jornada*, número 264, 12 de enero.

- Rubio, Blanca. 1996. Las organizaciones independientes en México: Semblanza de las opciones campesinas ante el proyecto neoliberal. En C. de Grammont, Hubert coord. *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*. México: Plaza y Valdés/UNAM.
- _____ 2003. *Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*. México: Plaza y Valdés, segunda edición.
- _____ 2017. El movimiento campesino en América Latina durante la transición capitalista. 2008-2016. *Revista de Ciencias Sociales. Segunda Época*. Argentina, UNQ (en prensa).